

## Política e Inteligencia en Colombia

[www.360geopolitica.org](http://www.360geopolitica.org)

Desde sus años en la oposición, el presidente Petro y su coalición *Pacto Histórico* han cultivado vínculos duraderos con grupos armados ilegales y organizaciones criminales –incluidos el Cartel de los Soles, el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo– bajo la justificación de promover la paz. Estas relaciones han generado serias preocupaciones sobre la seguridad nacional y la integridad de las instituciones democráticas de Colombia.

Tres casos ilustrativos subrayan estos riesgos: (1) el apoyo político y diplomático constante que Petro y el *Pacto Histórico* han expresado hacia el régimen Maduro; (2) su oposición pública a la extradición de Dairo Antonio Úsuga, alias *Otoniel*, líder del Clan del Golfo; y (3) sus esfuerzos políticos para promover la liberación de Santrich, un disidente de las FARC acusado de recibir fondos de carteles mexicanos, quien posteriormente escapó a Venezuela, presuntamente con la ayuda del ELN y del gobierno de Maduro.

La comunicación entre el círculo político de Petro y el régimen de Maduro se ha producido tanto de manera directa como indirecta –a través de intermediarios como Santrich e Iván Márquez, ambos ex negociadores del proceso de paz colombiano, así como mediante legisladores colombianos que actúan bajo la apariencia de “promotores de la paz.” Cabe destacar que, durante la pandemia de COVID-19, Petro viajó a Cuba, supuestamente para recibir tratamiento médico, alegando que el sistema de salud de la isla ofrecía capacidades únicas. Sus críticos sostienen que este episodio simbolizó lazos políticos e ideológicos más profundos con regímenes históricamente hostiles a los intereses nacionales de Colombia.

La evidencia sugiere que Petro y el *Pacto Histórico* han mantenido relaciones más estrechas y consistentes con Maduro y sus allegados que con el propio pueblo colombiano. Aunque algunas organizaciones internacionales y centros de pensamiento interpretaron la preocupación estatal sobre Petro como una acción motivada políticamente debido a su ideología de izquierda radical, múltiples informes señalan coordinación directa con el Cartel de los Soles, el M-19, el ELN, la Segunda Marquetalia, las disidencias de las

FARC y el Clan del Golfo en la organización de protestas a nivel nacional entre 2018 y 2022.

El atentado de 2019 contra la Escuela General Santander de la Policía en Bogotá, que dejó 22 cadetes muertos y numerosos heridos, fue atribuido al ELN. Aunque no existe evidencia verificada que vincule directamente a Petro o al *Pacto Histórico* con este ataque, su alineación pública con Maduro y sus presuntos nexos con el ELN generan preocupaciones creíbles sobre una posible complicidad o influencia indirecta. De manera significativa, en 2023 fueron liberadas cinco personas presuntamente implicadas en el atentado.

Desde su llegada al poder (2022), Petro –respaldado por el *Pacto Histórico*– habría compartido información de inteligencia con Maduro, Cabello y otros miembros del Cartel de los Soles. El propio Petro ha realizado seis viajes oficiales a Caracas, y sus asesores hasta 900. Declaraciones públicas de altos funcionarios reconocen una comunicación continua entre ministros colombianos clave y estos actores venezolanos en temas de seguridad y cooperación regional.

Según diversos informes, la Dirección Nacional de Inteligencia de Colombia habría proporcionado información a Maduro sobre figuras de la oposición venezolana residentes en el país. Mientras tanto, Petro no habría impedido ataques perpetrados por desconocidos contra algunos de estos opositores exiliados en Bogotá.

Bajo la bandera de la iniciativa de “Paz Total”, Petro y el *Pacto Histórico* parecen haber priorizado las negociaciones con grupos armados ilegales y redes criminales transnacionales por encima de la protección de la seguridad nacional. Este enfoque posiciona al gobierno como un intermediario de organizaciones ilícitas más que como un defensor de la soberanía colombiana.

En términos prácticos, compartir inteligencia con el dictador Maduro equivale a compartir información sensible con organizaciones criminales. Esto plantea riesgos profundos para la arquitectura de seguridad y la estabilidad democrática de Colombia, especialmente en la antesala de las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.

Bogotá, Colombia 13 de noviembre de 2025.